



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES

RESOLUCIÓN NÚMERO 121350 DE 2025

(23 de octubre 2025)

*"Por medio de la cual se resuelve el recurso presentado por el señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**"*

LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Que el Director de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante **Resolución No. 66014 del 22 de julio del 2025**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero al señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1095807203**, un valor de **TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$307.940,33); valor indexado al mes de JUNIO de 2025**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firma y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día **31/07/2022** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **DWA17D**, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2. En cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)**, se deja constancia de que la citación para notificación personal de la **Resolución No. 66013 del 22 de julio de 2025** fue remitida **mediante correo electrónico institucional**, conforme a los lineamientos de la **Ley 527 de 1999**, que otorga validez jurídica a los mensajes de datos y a sus mecanismos de acuse. Dicho mensaje fue **enviado y recibido el día 22 de agosto de 2025 a las 13:41:40 y 13:41:41, respectivamente**, según la **estampa de tiempo y acuse de recibo electrónico**, y fue **abierto por el destinatario a las 16:37:05 del mismo día**, conforme consta en el registro de trazabilidad de notificación electrónica. En consecuencia, se entiende surtida la citación en debida forma, y se solicita al destinatario **presentarse personalmente o por medio de apoderado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación**, en la **Avenida Calle 26 No. 69–76, Torre 1, Piso 16, Bogotá D.C.**, con el fin de notificarse personalmente del contenido de la citada resolución.
- 1.3. En cumplimiento del artículo 69 del CPACA (Ley 1437 de 2011), se deja constancia de que la **citación para notificación personal** de la Resolución No. 66014 fue remitida **por correo electrónico** a **monterogarciahenryjulian@gmail.com**, dirección que obra en el expediente, según **Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico Id No. 820277 de 4-72**; adicionalmente, la **trazabilidad electrónica** confirma **envío y acuse de recibo** del mensaje de datos (02/10/2025 21:25:50 y 21:25:51, respectivamente) y su **apertura por el destinatario** (02/10/2025 21:49:42), con plena validez jurídica conforme a los **arts. 23 y 24 de la Ley 527 de 1999**. Transcurridos **cinco (5) días hábiles** desde la citación

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

sin que el interesado se presentara a notificarse personalmente, **la ADRES procede a NOTIFICAR por AVISO** la citada resolución, remitiéndolo al correo registrado y **publicándolo en la página web institucional y en lugar visible por cinco (5) días**, dejando a disposición copia íntegra del acto; la **notificación por aviso se entiende surtida** en los términos del artículo 69 ibídem, con todos sus efectos legales.

- 1.4. Que el señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**, interpuso recurso de reposición en contra de la **Resolución No. 66014 del 22 de julio del 2025**, con radicado 20256305670072 y 20256305670042 del 11 de octubre de 2025, argumentando entre otras cosas; la falta del plazo legal para expedir la resolución que se impugna.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO

Una vez analizado el recurso interpuesto por el señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA** y confrontada la fecha de notificación se encuentra que, este reúne los requisitos legales para ser estudiado de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en la delegación de que trata el numeral 2º del artículo 6 de la Resolución 1012 del 20 de mayo de 2022, corresponde a la Dirección de Otras Prestaciones, la competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 del acto administrativo recurrido.

3. DEL RECURSO INTERPUESTO

"(...) I. ANTECEDENTES 1. Mediante Resolución No. 66014 del 22 de julio de 2025, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES me impuso la obligación solidaria de pago por la suma de \$307.940,33 indexada, por concepto de servicios de salud e indemnizaciones cubiertos con cargo a la Subcuenta ECAT, derivados del accidente de tránsito ocurrido el 31 de julio de 2022, en el cual se vio involucrado el vehículo de placas DWA17D que registra a mi nombre. 2. Se fundamenta la decisión en el hecho de que el vehículo de placas DWA17D que registra bajo mi propiedad no contaba con póliza SOAT vigente al momento del accidente. 3. Desde el mes de enero de 2019 no tengo el control material del vehículo, razón por la cual no fui participe del accidente de tránsito ocurrido el 31 de julio de 2022, hecho que se reconoce en la resolución de la referencia, pues se señala que el vehículo estaba siendo conducido por el señor RAMIRO ANDRES DIAZ JIMENEZ, identificado(a) con el tipo de documento CC No. 1192898231. 4. Adicional a lo anterior, se tiene que la Resolución No. 66014 mediante la cual la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES ordena el pago de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de servicios en salud y transporte y/o indemnización a las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados, fue expedida el día 22 de julio de 2023, no obstante, el pago de la reclamación No. 1793245 se efectuó el 24 de mayo de 2023. Esto quiere decir que la Resolución 66014 se profirió transcurridos 2 años y 2 meses desde el pago. 5. Contra la decisión de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES procede recurso de reposición, el cual interpongo dentro del término legal, argumentado en los siguientes fundamentos de derecho. II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 1. Caducidad de la acción de repetición El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 11001030600020160009500 (2296), 06/09/2017 concluyó que la caducidad o prescripción de las obligaciones que se encuentran registradas en los estados financieros del

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES) en virtud de los pagos hechos con ocasión de accidentes de tránsito causados por vehículos no identificados o carentes de SOAT, opera de pleno derecho y constituye un límite temporal a la potestad administrativa para declarar y exigir la repetición. En estos términos el Consejo de Estado realiza el siguiente análisis normativo: "(...) 4.1 Acción judicial de repetición contra los responsables del accidente de tránsito o sus aseguradores (artículo 199-4 del E.OS.F) El artículo 199 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que recoge lo que al respecto establecía el artículo 16 del Decreto Extraordinario 1032 de 1991, establece una acción de repetición contra los responsables del accidente de tránsito y sus aseguradores, en los siguientes términos: "Artículo 199. Aspectos Generales (...) 4. Destinación de los recursos del "FONSAT" (...) Parágrafo. En todo caso, la entidad encargada de administrar el "FONSAT" entablará todas las acciones de repetición que legalmente resulten procedentes contra los responsables de los accidentes y, en el evento de establecerse que los mismos estaban asegurados, tales acciones se ejercerán ante las entidades aseguradoras respectivas."37 (Se resalta el aparte pertinente) Como se observa, bajo la regla general de responsabilidad del artículo 2341 del Código Civil, según la cual "el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización", el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permite que el FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES), en cuya subcuenta ECAT está integrado el FONSAT, pueda dirigirse contra los responsables del accidente de tránsito o sus aseguradores (se entiende que son seguros de responsabilidad civil distintos o adicionales al SOAT). Este mecanismo de recuperación de las sumas pagadas por parte del FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES) en el caso de accidentes de tránsito tiene las siguientes características: (i) es una acción de repetición; (ii) está basada en la responsabilidad civil; (iii) se ejerce contra los responsables del accidente de tránsito o sus aseguradores; y (iv) corresponde a una acción judicial declarativa, en la medida en que si no hay un pago voluntario de la obligación, solo un juez, podría determinar la responsabilidad civil del accidente de tránsito, a través de un proceso judicial y con respeto de las normas que rigen el debido proceso (artículo 29 C.P)38. Esta repetición se encuentra basada, por una parte, en las normas generales que regulan la subrogación de las obligaciones, esto es, "la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga" (artículo 1666 C.C.). Particularmente, se relaciona con los artículos 168839 y 167040 del Código Civil, los cuales se refieren a la subrogación legal de quien paga una obligación ajena y en virtud de dicho pago se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios del acreedor original.41 Por otra parte, la repetición que se estudia responde a la regla del artículo 1096 del Código de Comercio, según la cual "el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra los responsables del daño", que es lo que ocurre, precisamente, cuando el FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES), en el caso de vehículos no identificados o no asegurados, asume la posición que normalmente tendrían las aseguradoras respecto de las coberturas propias del SOAT. En síntesis, el artículo 199-4-parágrafo del EOSF consagra un tipo de subrogación legal que le permite al FOSYGA dirigirse contra los responsables del accidente de tránsito o sus aseguradores para recuperar las sumas pagadas por virtud del hecho dañoso. Este mecanismo de repetición será especialmente importante en los casos en los que el responsable del accidente no es el propietario o el conductor del vehículo carente de SOAT sino un tercero, caso en el cual el FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES) puede intentar contra ese tercero o sus aseguradores las acciones tendientes a recuperar los recursos de la Subcuenta ECAT. En cuanto al plazo para ejercer estas acciones, la Sala observa que al momento de expedirse el

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (1993) no había una disposición especial expresa que confirmara la competencia a la jurisdicción contenciosa para conocer las demandas del Estado contra los particulares por los daños causados por estos y, por ende, el tema de la prescripción (o caducidad) podía permitir alguna discusión. No obstante, desde la Ley 446 de 1998⁴², la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas que el Estado debe presentar contra los particulares por los daños que estos le causen. Así lo establece actualmente el artículo 140 del CPACA, que señala: "Artículo 140. Reparación directa (...) Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública." En estos casos el plazo de caducidad de la acción de repetición será dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del mismo CPACA. Este plazo empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza del FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES), lo cual ocurre cuando se efectúa el pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del artículo 164-2 (i) del CPACA y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimiento judiciales o administrativos por parte del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el FOSYGA (ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES) pueda intentar el cobro dentro del proceso penal que se tramite como consecuencia del accidente de tránsito, a través del incidente de reparación integral previsto en el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la Ley 1395 de 2010), el cual le permite a las víctimas de un delito, sus herederos, sucesores o causahabientes, reclamar los daños derivados de la conducta punible⁴³. En este caso habría que tener en cuenta el plazo especial de caducidad establecido en el artículo 106 del CPP, modificado por el artículo 106 de la Ley 1395 de 2010, según el cual "la solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio" (...). En mérito de lo expuesto, concluye: "(...) a) La caducidad para expedir el acto administrativo que ordena el reembolso a favor del FOSYGA acaece a los dos años contados desde el momento de la exigibilidad de la respectiva obligación, hecho este que para el caso del FOSYGA ocurre desde que se hace el pago, de conformidad con los artículos 140 y 164-2 (i) del CPACA. Lo anterior sin perjuicio de la acción de repetición que puede intentarse durante el término previsto en dichas normas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra los responsables del accidente de tránsito y sus aseguradores. Lo anterior reforzado precisamente, por el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012, citado en la resolución 66014 expedida por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, el cual dispone: "(...) ARTÍCULO 114. Servicios de salud, transporte al centro asistencial e indemnizaciones por concepto de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ¿SOAT o no identificados. Las EPS asumirán el riesgo derivado de la prestación de los servicios en salud y el transporte al centro asistencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, que se encuentren afiliadas al sistema general de seguridad social en salud. La prestación de dichos servicios se realizará en la red definida por la EPS a las tarifas convenidas, sin perjuicio de que la atención inicial de urgencias sea prestada en forma obligatoria por todos los prestadores de servicios de salud, en el marco de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1751 de 2015. La facturación de los servicios se realizará sin sujeción al régimen tarifario, coberturas y cuantías del SOAT. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto ley, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, establecerá la metodología para definir el

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

valor de la prima y forma de pago que se reconocerá a las EPS para que asuman el riesgo derivado de garantizar la atención en salud y el transporte al centro asistencial de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, y el mecanismo para dicho pago. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES continuará reconociendo las indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios de los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, así como los servicios de salud y el transporte de las víctimas no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a las afiliadas a los regímenes Especial y de Excepción, de acuerdo con las coberturas establecidas en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 112 del Decreto Ley 019 de 2012; también podrá repetir contra el propietario del vehículo que haya incumplido la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ¿ SOAT, para obtener el pago de las indemnizaciones efectuadas y los servicios de salud brindados a las víctimas del accidente, en esta último caso, las EPS deberán reportar la información necesaria a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES de manera periódica y oportuna. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición. PARÁGRAFO 1. La asunción, por parte de las EPS, del riesgo derivado de garantizar la atención en salud y el transporte al centro asistencial de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, no dará lugar a ajustar el porcentaje de gastos de administración, por cuanto la misma estará contemplada en el valor de la prima que defina el Ministerio. PARÁGRAFO 2. Cuando la víctima sea el propietario del vehículo carente de la póliza SOAT, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES no reconocerá la indemnización por incapacidad permanente, muerte ni gastos funerarios (...)” Así las cosas, frente al presente caso se observa que: • El pago efectuado por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, correspondiente a reclamaciones Nos. 1793245 reconocidas por concepto de servicios en salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc.) y transporte al centro asistencial, y/o indemnización por incapacidad permanente, por muerte y gastos funerarios, y por gastos de transporte, por valor de TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$307.940,33) con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 31 de julio de 2022; se realizó el 24 de mayo de 2023. • En consecuencia, el vencimiento del término de caducidad para expedir el acto administrativo que ordena el reembolso a favor del FOSYGA venció el 24 de mayo de 2025. • No obstante, la resolución No. 66014 que me impone la obligación solidaria de pago en calidad de propietario (a) del vehículo de placa DWA17D por valor de TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$307.940,33) fue expedida por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES 22 de julio de 2025, es decir, se encuentra fuera del término legal, por lo cual se encuentra viciada de nulidad y no puede producir efectos jurídicos. 2. Solidaridad mal aplicada La doctrina y la jurisprudencia administrativa y constitucional han explicado que la mera titularidad registral del vehículo no basta para convertir al propietario en deudor solidario sin que exista una motivación y prueba de imputabilidad (culpa, dolo o una omisión imputable) que lo conecte con el hecho dañoso. Mediante la Sentencia C-038 de 2020 se estableció de manera inequívoca que en materia de tránsito existe una responsabilidad solidaria entre el

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

propietario del vehículo y el conductor así. "(...) En suma, aunque tanto en el derecho privado, como en el derecho público se establezcan formas de responsabilidad solidaria frente a obligaciones de resarcir perjuicios, a la luz de la jurisprudencia constitucional, la solidaridad pasiva en materia sancionatoria resulta inconstitucional si conduce a que la sanción recaiga sobre una persona diferente a quien realizó personalmente el acto reprochado. Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia, la constitucionalidad de la solidaridad en materia sancionatoria exige el respeto de las siguientes condiciones: (i) los sujetos obligados solidariamente deben ser vinculados al procedimiento administrativo en el que se determinará la responsabilidad y se impondrá la sanción, para que ejerzan su derecho constitucional a la defensa. Por lo tanto, la sanción no puede ser automática o de plano⁵⁹; (ii) la infracción debe ser personalmente imputable a cada obligado solidariamente, lo que implica que la solidaridad en materia de sanciones administrativas, no permite una forma de responsabilidad por el hecho ajeno y (iii) la infracción debe haber sido cometida de manera culpable por cada uno de los obligados solidariamente, considerando que aunque excepcionalmente es admisible la responsabilidad objetiva, la jurisprudencia constitucional ha exigido siempre responsabilidad por culpa en estos casos, como una manera de mitigar la solidaridad legal. (...)” Así también advirtió la Corte que, "(...) en el ejercicio de la reserva constitucional de ley en materia sancionatoria, le corresponde al Congreso de la República el diseño de la política punitiva del Estado y, en particular, determinar con precisión todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, así como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y los principios de imputabilidad personal y culpabilidad, que impiden, cada uno, que se responda por el hecho ajeno (pago de la multa, reincidencia, suspensión de la licencia, etc.) y de manera objetiva. Por lo tanto, la regulación en la materia que expida el Congreso de la República podría prever una responsabilidad solidaria para el pago de las multas, por hechos total o parcialmente imputables al propietario del vehículo, que no impliquen el acto de conducir y se refieran al estado de cuidado físico-mecánico del vehículo (luces, frenos, llantas, etc.) o al cumplimiento de obligaciones jurídicas, tales como la adquisición de seguros o la realización de las revisiones técnico mecánicas. Tales obligaciones recaen tanto sobre el conductor, como sobre el propietario del vehículo, incluso si éste es una persona jurídica, no conduce o no dispone de la licencia para conducir. Sin embargo, al tratarse de normas de contenido sancionatorio, los sujetos responsables, las infracciones y las sanciones, deben estar determinados por el Legislador de manera previa y cierta, como garantías del derecho al debido proceso. (...)” Sumado a lo anterior, son precisamente los articulados citados en la resolución 66014 de 2025 expedida por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES los que definen que para el caso en el que exista reconocimiento de las indemnizaciones y/o servicios de salud brindados a las víctimas de accidentes de tránsito en los que se vean involucrados vehículos que no cuenten con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, están llamados a responder tanto el propietario del vehículo como quien lo conduce. Artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016 y el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019 "(...) ARTÍCULO 2.6.1.4.3.14. Repetición. Se podrá repetir el pago realizado a las víctimas de accidentes de tránsito, así: 1. Las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, podrán repetir en acción judicial contra la Subcuenta ECAT del Fosyga, el valor de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos cancelados a la víctima o a los beneficiarios, cuando judicialmente se demuestre que la póliza que ampara el vehículo que ocasionó el accidente de tránsito, es falsa. 2. Las compañías aseguradoras podrán repetir contra el tomador del seguro por cualquier suma que hayan pagado como indemnización, cuando quien esté conduciendo el vehículo en el momento del accidente haya actuado con autorización del tomador y con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece de vicios o defectos coetáneos a su contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194 del Estatuto Orgánico del Sistema

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

Financiero. 3. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, podrá repetir contra la compañía aseguradora autorizada para expedir el SOAT, cuando con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga se hayan pagado servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, y se compruebe que él o cualquiera de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito estaban amparados por una póliza SOAT a la fecha de ocurrencia del mismo. 4. Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que reconozcan y paguen servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, originados en accidentes de tránsito, podrán repetir contra las compañías de seguros cuando los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo no fueron pagadas con cargo a la póliza SOAT legal y vigente al momento del accidente. Para tales efectos, las aseguradoras deberán manejar mecanismos que permitan el cruce de información que impidan la duplicidad de pagos por los mismos conceptos. PARÁGRAFO . De conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente, será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente. (...)” Artículo 106 de la ley 2106 de 2019 que modificó el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012: “(...) ARTÍCULO 106. Servicios de salud, transporte al centro asistencial e indemnizaciones por concepto de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT o no identificados. El artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012 quedará así: “ARTÍCULO 114. Servicios de salud, transporte al centro asistencial e indemnizaciones por concepto de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT o no identificados. Las EPS asumirán el riesgo derivado de la prestación de los servicios en salud y el transporte al centro asistencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, que se encuentren afiliadas al sistema general de seguridad social en salud. La prestación de dichos servicios se realizará en la red definida por la EPS a las tarifas convenidas, sin perjuicio de que la atención inicial de urgencias sea prestada en forma obligatoria por todos los prestadores de servicios de salud, en el marco de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1751 de 2015. La facturación de los servicios se realizará sin sujeción al régimen tarifario, coberturas y cuantías del SOAT. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto ley, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, establecerá la metodología para definir el valor de la prima y forma de pago que se reconocerá a las EPS para que asuman el riesgo derivado de garantizar la atención en salud y el transporte al centro asistencial de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, y el mecanismo para dicho pago. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES continuará reconociendo las indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios de los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, así como los servicios de salud y el transporte de las víctimas no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a las afiliadas a los regímenes Especial y de Excepción, de acuerdo con las coberturas establecidas en el artículo 193 del Estatuto

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 112 del Decreto Ley 019 de 2012; también podrá repetir contra el propietario del vehículo que haya incumplido la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, para obtener el pago de las indemnizaciones efectuadas y los servicios de salud brindados a las víctimas del accidente, en esta último caso, las EPS deberán reportar la información necesaria a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES de manera periódica y oportuna. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición. PARÁGRAFO 1. La asunción, por parte de las EPS, del riesgo derivado de garantizar la atención en salud y el transporte al centro asistencial de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por el SOAT o no identificados, no dará lugar a ajustar el porcentaje de gastos de administración, por cuanto la misma estará contemplada en el valor de la prima que defina el Ministerio. PARÁGRAFO 2. Cuando la víctima sea el propietario del vehículo carente de la póliza SOAT, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES no reconocerá la indemnización por incapacidad permanente, muerte ni gastos funerarios. PARÁGRAFO 3. En ningún caso, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES ni la EPS serán responsables de la financiación y pago del examen o de la junta calificadora de invalidez para acreditar la pérdida de capacidad laboral de víctimas de accidentes de tránsito (...). En consecuencia, y sin perjuicio de la caducidad ya alegada, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES no acreditó los presupuestos mínimos para aplicar la solidaridad en contra del recurrente: (i) no demostró la existencia de una conducta culposa o dolosa del propietario; (ii) no acreditó por qué se le imputa a éste la obligación antes que al conductor identificado; y (iii) no garantizó la oportunidad procesal de defensa previa y adecuada. En tales condiciones la Resolución adolece de falta de motivación suficiente y vulnera mis derechos constitucionales. Así mismo, la resolución 66014 de 2025 que me impone la obligación de pago únicamente a mi calidad en calidad de propietario, tampoco vinculó debidamente al conductor del vehículo al momento del accidente, ni justificó el por qué la totalidad de la obligación recae en mi como propietario registral, vulnera el principio de responsabilidad personal y el derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 de la constitución política colombiana. III. PETICIÓN Por lo anterior, respetuosamente solicito: 1. Que se revoque en su integridad la Resolución No. 66014 del 22 de julio de 2025, por haber sido expedida cuando ya había operado la caducidad de la acción de repetición, de conformidad con lo precipitado en el acápite de fundamentos de derecho y en especial por el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012, al haberse efectuado el pago de la reclamación No. 1793245 el 24 de mayo de 2023 y proferirse la resolución de cobro el 22 de julio de 2025, esto es, más de dos (2) meses después de vencido el término de dos (2) años legalmente establecido. En consecuencia, solicito se declare extinguida la acción de repetición por caducidad y se ordene el archivo definitivo de la actuación administrativa. 2. Que se declare la nulidad parcial o total de la Resolución No. 66014 de 2025 por indebida aplicación del principio de solidaridad entre propietario y conductor, toda vez que la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES no demostró imputabilidad alguna al suscrito ni motivó adecuadamente por qué dirigió el cobro únicamente contra el propietario, omitiendo vincular al conductor identificado en el propio acto administrativo. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la solidaridad no puede imponerse de

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

manera automática ni objetiva, sino que exige demostrar la culpa o la omisión imputable del propietario, garantizando su derecho de defensa y contradicción. En consecuencia, se solicita que el acto recurrido sea revocado o, subsidiariamente, modificado para vincular al conductor y determinar de manera equitativa y motivada las responsabilidades individuales. 3. Que, en subsidio, para el evento en que la Dirección considere mantener la resolución, se disponga la suspensión de los efectos del acto administrativo y del cobro coactivo, hasta tanto se decida de fondo el recurso de reposición, en aplicación del principio de eficacia del derecho de defensa (art. 29 C.P. y arts. 74 y 79 de la Ley 1437 de 2011). 4. Que se garantice el acceso integral al expediente administrativo y a los soportes probatorios con base en los cuales se determinó el valor objeto de repetición y la supuesta responsabilidad del recurrente, permitiendo ejercer el derecho de contradicción frente a la carga probatoria que le corresponde a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES (...)"

4. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase.**

La facultad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1,4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la **Resolución No. 66014 del 22 de julio del 2025**, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a su favor correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

Asimismo, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente - SOAT, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **31/07/2022** y del cual se realizó el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, y se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, la ADRES pagara las reclamación número **1793245** contenidas en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de determinación del deudor contra el señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**, propietario para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado.

De otra parte, se precisa que para poder ordenar el cobro contra los **propietarios y/o conductores** cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, resulta necesario el reconocimiento y pago de reclamaciones a la IPS o a las o a los beneficiarios cuando se presente fallecimiento conforme al artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023 se tiene que:

"El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema."

Es decir que, previo a desplegar las actuaciones administrativas tendientes a iniciar el cobro en contra de los obligados, las IPS deben efectuar la radicación de las reclamaciones ante la Entidad, para luego, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución 1645 de 2016 y la ley 1753 de 2015, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, realiza la auditoria de las reclamaciones que son presentadas, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a las reclamaciones fundamento de la obligación que recae a nombre del obligado,

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Luego de concluido el trámite anterior, y teniendo en cuenta que la ley 1066 del 29 de julio de 2006 en su artículo 5 dispone:

"FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".*

Esta administradora, con el fin de hacer exigibles obligaciones, entre las que se encuentran las derivadas de las reclamaciones presentadas con ocasión a daño a terceros en accidente de tránsito que debieron ser asumidos por el Estado a través de la ADRES, mediante Resolución 037 del 19 de enero de 2018 estableció el Reglamento Interno de Cartera de la ADRES, allí se indica que luego del reconocimiento de una acreencia a favor de la Entidad que no conste en un título preexistente, se deberá constituir un título ejecutivo (resolución que ordena el cobro), el cual será ejecutado posteriormente a través del proceso de cobro coactivo reglamentado por el Estatuto Tributario, el cual inicia a partir de que se libra el respectivo mandamiento de pago.

Ahora bien, es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor.

En ese contexto, se debe entender que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para ello. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas tanto en vía administrativa como judicial. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño.

En atención a lo dicho, se entiende que el plazo de caducidad de la acción de repetición será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del CPACA y lo dispuesto en el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, lo cual ocurre cuando se efectúa el último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del artículo 164-2 (i) del CPACA y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimientos judiciales o administrativos por parte del Estado.

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine, se evidencia que la **Resolución No. 66014 del 22 de julio del 2025** que impone el pago de la obligación en contra del señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**, se expidió posterior a los dos (2) años con los que contaba la administración para poder hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, razón por la cual, entiéndase entonces que la oportunidad para expedir el acto administrativo por parte de la ADRES, feneció como quiera que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Entidad con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa **DWA17D**, fue el día **24/05/2023** y la expedición del título ejecutivo fue el día **22/07/2025**; situación que a todas luces evidencia la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición a favor de la Entidad.

Id. Reclamación	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombres	Placa	Fecha Accidente	Número Paquete	Número Reclamación	Fecha Giro	Valor	Total Abonado	Saldo	Estado
1793245	CC	1095807203	HENRY JULIAN MONTERO GARCIA	DWA17D	13/07/2021	28017	13030099	24/05/2023	273.274.00	0.00	273.274.00	VIGENTE
1793246	CC	1095807203	HENRY JULIAN MONTERO GARCIA	DWA17D	28/07/2022	28017	13030100	24/05/2023	1.171.305.00	0.00	1.171.305.00	VIGENTE

En consecuencia, con el ánimo de resolver la situación administrativa y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos que anteceden, esta Dirección declarará la **CADUCIDAD** de la acción de repetición respecto a la obligación contenida dentro de la reclamación **1793245** y como consecuencia de ello, se ordenará el archivo de la actuación administrativa adelantada en contra del señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**.

Finalmente se indica, que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER la **Resolución No. 66014 del 22 de julio del 2025**, y en consecuencia **DECLARAR LA CADUCIDAD** dentro de la presente actuación administrativa respecto a la obligación contenida dentro de la reclamación **1793245** por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la **TERMINACIÓN** y **ARCHIVO** de la actuación administrativa adelantada en contra del señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA** respecto a la obligación contenida dentro de la reclamación **1793245** de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al señor **HENRY JULIAN MONTERO GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1095807203**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

Destinatario	Dirección física y/o electrónica
HENRY JULIAN MONTERO GARCIA	Monterogarciahenryjulian@gmail.com y tatianasuarez.servicioslegales@gmail.com

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTICULO SEXTO: INFORMAR la presente decisión a la Oficina de Control interno disciplinario, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D.C., a los (23) días del mes de octubre de 2025.



Firmado Digitalmente por
YASMÍN ESCAMILLA B.
Directora de Otras Prestaciones

Revisó: Rafael Enrique Roa Pinzón - Abogado Contratista

Elaboró: Simón Hinestroza Contratista

Expediente: HENRY JULIAN MONTERO GARCIA C.C.: 1095807203

Anexos: Sin anexos.